



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

EXPTE: 35305/2023

“CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia interlocutoria

VISTO:

El recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada cumpliendo las exigencias previstas en la Acordada 4/2007 del Superior Tribunal de la Nación. En dicha presentación se cuestiona lo decidido por esta Sala, al entender que dicho pronunciamiento incurre en gravedad institucional constituyendo una sentencia arbitraria por lo que cabe, a juicio de la apelante, su descalificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La parte actora contestó el traslado conferido.

Y CONSIDERANDO:

La recurrente funda su recurso en la interpretación legal realizada por el Tribunal para la resolución del presente caso, específicamente en cuanto a los alcances del régimen de alícuotas impuesto por el Decreto 814/01. Alega que al dictar dicho pronunciamiento la Sala incurrió en arbitrariedad al decidir como lo hizo y también en gravedad institucional. No obstante, no argumenta porqué en el sublite se halla en juego la interpretación de normas federales y dicha situación encuadra en lo previsto por el art. 14 inc. 3 de la ley 48.

Ahora bien, la vía excepcional del recurso extraordinario no procede si los argumentos de los presentantes sólo trasuntan sus discrepancias con el alcance acordado a la legislación aplicable y con la valoración de las circunstancias de hecho debatidas, aspectos que no autorizan la apertura del remedio federal planteado (Fallos 308: 1118).

También ha señalado el Tribunal Cintero que es inaplicable la doctrina de la arbitrariedad cuando no se demuestra que los magistrados de la causa han excedido las facultades de interpretación de las normas legales que les son propias, no bastando que el quejoso las estime claras en lo que su texto dispone ya que el argumento meramente literal o gramatical no debe obstar a la determinación de su significado jurídico (Fallos 308:2475).

La doctrina de la arbitrariedad, entre otros requisitos, para la habilitación de esta última instancia excepcional, requiere se acredite la violación concreta a las garantías constitucionales y no la mera disconformidad del recurrente con el mérito que efectuó el Tribunal Juzgador (Fallos: 331:477; 329:3949; 324:4300; 323:262, 488; 322:792, entre muchos otros).

Tampoco se configura en autos un supuesto de gravedad institucional que habilite la apertura de la instancia extraordinaria, pues no se encuentran en juego instituciones básicas del sistema republicano de gobierno ni los principios y garantías constitucionales consagrados.

La sola mención de preceptos constitucionales y la mera invocación de gravedad institucional no bastan para tener por cumplida la exigencia de fundamentar el derecho federal que sustente cada uno de los agravios del recurso previsto por el art. 14 de la ley 48 (conf. CSJN



24/09/1991 “Tejidos Argentinos Noreste S.A. c/Municipalidad de Buenos Aires” pub. La Ley 1992-A-205; ED 146-295).

La apelante no logró demostrar que la cuestión invocada tenga virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden institucional que el recurso extraordinario tiende a tutelar o el fondo de algún instituto jurídico en conflicto (Sagües, Néstor Pedro “Compendio de Derecho Procesal Constitucional” 3ra. reimpresión, editorial Astrea, pág. 267 y sgtes).

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico el Supremo Tribunal tiene entre otras funciones la del control de constitucionalidad de las normas y actos estatales, y el control de legalidad y razonabilidad de la actividad de la administración pública. Dichas tareas son ejercitadas para lograr un estado de derecho que impida los males de la anarquía y la frustración colectiva, como así también el ejercicio de un poder arbitrario e ilimitado.

No obstante la misión de salvaguardar el orden jurídico no implica que nuestro Cívero Tribunal tenga como función resolver casos de carácter no federal, dado que se encuentran fuera de su esfera de control las cuestiones tuteladas por el denominado derecho común. Ello no ha impedido que en numerosas ocasiones haya intervenido en este tipo de controversias, sea para poner coto a un pronunciamiento que entendió arbitrario o carente de razonabilidad o para indicar el camino jurídico a seguir en la resolución de temas puntuales.

Sin perjuicio de lo anterior no debe olvidarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la solución de cuestiones que les son privativas, ni abrir una tercera instancia para debatir temas no federales (Fallos: 207:72; 306:1395; 331:1040; 331:2586; 341:1130), ni tampoco tiene por finalidad la corrección de fallos que se consideren equivocados, sino que sólo admite su intervención en aquellos supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad extrema, o que pueden ser descalificados al observarse deficiencias lógicas o violación a las reglas de la sana crítica, motivos estos por lo que dichos pronunciamientos no pueden adquirir validez constitucional (Fallos:342:1847, entre otros).

Corresponde, entonces desestimar por insustancial la alegada gravedad institucional, así como también la calificación de arbitrario del pronunciamiento atacado atento no haber sido objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquellas circunstancias.

Cabe recordar que lo resuelto en la sentencia cuestionada viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara, sumado a que la CSJN en CSS 093739/2011/1 - Recurso Queja N°1 - SOS S.A. c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS – DGI s/IMPUGNACION DE DEUDA sentencia del 12 de diciembre de 2017, dejó firme -por aplicación del art. 280 CPCCN- el criterio aquí propuesto en un caso de aristas similares resuelto por la Sala I de esta Cámara.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Por las consideraciones efectuadas precedentemente, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto, e imponer las costas en el orden causado atento la particularidad del planteo debatido (art. 68 2do párrafo CPCCN).

Por lo expuesto el **Tribunal**, por mayoría, **RESUELVE**: 1º) Denegar la concesión del recurso extraordinario presentado 2º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara
-en disidencia-

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto de mis colegas preopinantes en relación a la denegación del recurso extraordinario presentado, pero disiento respecto a la imposición de las costas, que considero deben ser a la demandada de acuerdo al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. y el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I.”, sentencia del 05/10/04 -en la que remite a los fundamentos vertidos por la minoría en los precedentes “Farmacia España” (Fallos 323:1557) y “Asociación de Trabajadores del Estado” (Fallos 323:2349)-, deben imponerse las costas al recurrente vencido. Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así, teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación, en cuanto a que la regulación de honorarios, no debe depender exclusivamente del monto del reclamo, sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216; entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” Sentencia del 4 de septiembre de 2018, se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 2 UMA - equivalente a \$132.872 (pesos ciento treinta y dos mil ochocientos setenta y dos), conforme Acordada de la C.S.J.N. N° 39/2024, Res. SGA N° 3495/2024 y art. 19 de la ley 27.423. Al monto establecido deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93; Fallos: 316:1533). Con relación a los honora-



rios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27.423. Por lo expuesto es mi voto: 1º) Rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, 2º) Imponer las costas a la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.), 3º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 132.872 (pesos ciento treinta y dos ochocientos setenta y dos), conforme Acordada de la C.S.J.N. N° 39/2024, Res. SGA N° 3495/2024 y art. 19 de la ley 27.423. Al monto establecido deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/ Recurso de Apelación" sent. del 16/06/93; Fallos: 316:1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27.423.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO
Prosecretario de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Fecha de firma: 14/05/2025

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#38083775#440453692#20241230105641384

Fecha de firma: 14/05/2025
Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#38083775#440453692#20241230105641384